



Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Hisenda i Pressuposts

Junta Consultiva

de Contractació Administrativa

Exp. Junta Consultiva: RES 15/2014

Resolución de la solicitud de suspensión

Exp. de origen: contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para la adquisición de alta tecnología de equipamiento de cuidados respiratorios e incubadoras en el nuevo Hospital Universitario Son Espases

SSCC DC 128/09

Servicio de Salud de las Illes Balears

Recurrente: General Electric Healthcare España, SAU

Acuerdo de la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación de 31 de marzo de 2014 por el que se deniega la suspensión de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Illes Balears sobre la revisión de las deducciones aplicables al pago por disponibilidad correspondiente al cuarto trimestre de 2013 del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para la adquisición de alta tecnología de equipamiento de cuidados respiratorios e incubadoras en el nuevo Hospital Universitario Son Espases

Hechos

1. El 15 de octubre de 2010 el director general del Servicio de Salud de las Illes Balears y la representante de General Electric Healthcare España, SL (actualmente, SAU) firmaron el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para la adquisición de alta tecnología de equipamiento de cuidados respiratorios e incubadoras en el nuevo Hospital Universitario Son Espases.
2. El 20 de febrero de 2014 el director general del Servicio de Salud de las Illes Balears dictó la Resolución por la que se establece una deducción correspondiente al cuarto trimestre de 2013 por un total de 4.957,36 euros, de acuerdo con el apartado 18 (por error en la Resolución se menciona el apartado 17) del documento de determinación de medios técnicos que reguló la licitación y el informe de la Unidad de Coordinación de Servicios Concesionados por el que se realizó una revisión del servicio de disponibilidad del contrato. Esta Resolución se notificó al contratista el 24 de febrero de 2014 por correo electrónico.



3. El 21 de marzo de 2014 el representante de General Electric Healthcare España, SAU interpuso ante la Junta Consultiva de Contratación Administrativa un recurso especial en materia de contratación contra la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Illes Balears de 20 de febrero de 2014 sobre la revisión de las deducciones aplicables al pago por disponibilidad correspondiente al cuarto trimestre de 2013 de este contrato.

En este escrito el recurrente solicita que se anule la Resolución impugnada y se suspenda su ejecución, dado que podría suponerle un perjuicio de difícil o imposible reparación.

Fundamentos de derecho

1. El artículo 111.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que:

La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

De acuerdo con la regla general que establece este artículo, la Resolución objeto de impugnación es un acto administrativo inmediatamente ejecutivo.

Sin embargo, el apartado 2 de este mismo artículo dispone que:

El órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurren alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
- b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 62.1 de esta Ley.

2. El recurrente manifiesta que la ejecución de la Resolución impugnada podría suponerle un perjuicio de difícil o imposible reparación, y que esta Resolución es un acto administrativo de contenido económico de carácter desorbitado, dado que la deducción por disponibilidad que se establece en el mismo supone un porcentaje muy considerable del importe total que ha de abonarse a General Electric Healthcare España, SAU en el marco del contrato.



Debe señalarse que la Resolución objeto del recurso, cuya suspensión solicita el recurrente, es un acto de contenido meramente económico, y estos actos no causan perjuicios de difícil o imposible reparación. Así lo ha manifestado el Tribunal Supremo, entre otras, en la Sentencia de 16 de mayo de 2000, en la que manifiesta que:

como ya tiene reiterado esta Sala, el contenido económico del acto administrativo, cuando éste no ostenta un carácter desorbitado, no puede reputarse perjuicio de difícil o imposible reparación, base necesaria e imprescindible para acordar la suspensión, porque la Administración es por su propia naturaleza y normal funcionamiento una entidad responsable y solvente en grado máximo, y por tanto, ante la posible existencia de perjuicios derivados de la ejecución inmediata del acto administrativo que posteriormente fuere anulado en vía jurisdiccional, no puede ofrecer ni ofrece dificultades la adecuada y fácil reparación de los mismos.

El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears se ha manifestado en el mismo sentido en las sentencias de 10 de enero y de 5 de junio de 2012, entre otras.

Además, el Tribunal Supremo, en la Sentencia de 31 de octubre de 1995, manifestó lo siguiente:

Ciertamente, constituye doctrina reiteradamente mantenida por esta Sala, que si bien el contenido económico del acto administrativo, no debe reputarse perjuicio de difícil reparación -base necesaria para acordar la suspensión- dada la solvencia y responsabilidad de la Administración, para la reparación del daño, si así fuese procedente, ello, desde luego, ha de referirse a contenidos económicos racionalmente moderados en relación con las circunstancias de cada caso, más si [mas sí] debe reputarse procedente la suspensión del acto impugnado si tales daños y perjuicios resultantes de la ejecución del acto impugnado son de muy considerable entidad, de modo que dificulte su posible resarcimiento y suponga un sacrificio económico de relevante y significativa magnitud para el obligado a su ejecución, en directa relación con el grado demandado por el interés público para su ejecución.

La afirmación del recurrente de que el importe de la deducción a que se refiere la Resolución impugnada —de 4.957,36 euros— es desorbitado, le causa un perjuicio de difícil o imposible reparación y supone un porcentaje “considerable” del que ha de abonársele en el marco del contrato resulta sorprendente, sobre todo si se tiene en cuenta que el precio del contrato, que tiene una duración de siete años, es de 3.439.662,30 euros, IVA excluido, y que la parte del precio correspondiente al servicio de disponibilidad es de 955.152,96 euros, IVA



excluido. Por tanto, no es cierto que suponga un porcentaje considerable del importe total que se le ha de abonar.

Por tanto, dado el importe de la deducción, que en ningún caso podría considerarse desorbitado, y en atención al interés público, no existe ninguna causa que fundamente la suspensión de la Resolución sobre la revisión de las deducciones aplicables al pago por disponibilidad correspondiente al cuarto trimestre de 2013 del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para la adquisición de alta tecnología de equipamiento de cuidados respiratorios e incubadoras en el nuevo Hospital Universitario Son Espases.

Por todo ello, dicto el siguiente

Acuerdo

1. Denegar la suspensión de la ejecución de la Resolución sobre la revisión de las deducciones aplicables al pago por disponibilidad correspondiente al cuarto trimestre de 2013 del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para la adquisición de alta tecnología de equipamiento de cuidados respiratorios e incubadoras en el nuevo Hospital Universitario Son Espases, dado que no se acredita que de la misma se derive perjuicio alguno para el recurrente.
2. Notificar este Acuerdo a General Electric Healthcare España, SAU y al director general del Servicio de Salud de las Illes Balears.

Interposición de recursos

Contra este Acuerdo —que agota la vía administrativa— puede interponerse un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se reciba la notificación, de acuerdo con los artículos 10.1 *a* y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.